



Resolución Directoral

Lima, 26 de febrero del 2021

Visto, el expediente N° 57279-2019-PAS del administrado **LLAUCE VALDERA JOSE EDILBERTO**, identificado con RUC N° 10406036729, y domicilio ubicado en Calle Los Incas N° 102, distrito de Morrope, provincia y departamento de Lambayeque, sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador y el Informe N° 384-2021/DFIS/DIGESA, de fecha 19 de febrero del 2021, del Área de Sanción de la Dirección de Fiscalización y Sanción, y;

CONSIDERANDO:



C. FERNANDEZ

Que, con fecha 02 de agosto del 2017, personal inspector de la Dirección Regional de Salud Lambayeque (en lo sucesivo, DIRESA Lambayeque), efectuó la vigilancia sanitaria al establecimiento de fabricación del administrado **LLAUCE VALDERA JOSE EDILBERTO** (en adelante, el administrado), identificado con RUC N° 10406036729, ubicado en Calle Unión Mz. D1, Lote 30, Urb. Popular Miraflores, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, verificando presuntos incumplimientos a la normativa sanitaria vigente, por lo que se le otorgó un plazo perentorio de veinte (20) días hábiles a fin de que subsane las observaciones formuladas en la diligencia;

Que, el 24 de agosto del 2017, de acuerdo al "Acta de Inspección y Constatación N° 009234", personal inspector de la DIRESA Lambayeque, refirió no haber podido efectuar la vigilancia sanitaria al establecimiento de fabricación del administrado, dejándose constancia de tales hechos;

Que, asimismo, con fecha 20 de octubre del 2017, conforme al "Acta de Subsanación de Observaciones de Inspección Sanitaria" personal de la DIRESA Lambayeque, efectuó una nueva inspección sanitaria al establecimiento de fabricación del administrado, a fin de verificar la presunta subsanación de aquellas observaciones efectuadas durante la vigilancia sanitaria de fecha 20 de agosto del 2017;

Que, el 28 de mayo del 2018, mediante el Memorandum N° 274-2018/DCOVI/DIGESA, la Dirección de Control y Vigilancia (en adelante, DCOVI), de la DIGESA, remitió a la Dirección de Fiscalización y Sanción (en lo sucesivo, DFIS), el expediente N° 1909-2018-DRS) conjuntamente con el Informe N° 1524-2018/DCOVI/DIGESA, para que proceda de acuerdo a sus competencias;

Que, el 04 de diciembre del 2018, la Autoridad Instructora notificó al administrado el Auto N° 350-2018/AI/DFIS/DIGESA/SA, sustentado en el Informe N° 2658-2018/AI/DFIS/DIGESA/SA, mediante el cual se decidió el inicio del procedimiento administrativo sancionador (en adelante PAS), en su contra, por la presunta comisión de las conductas infractoras tipificadas en los literales a), b),

c), d), f), k), y m) del artículo 121 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias;

Que, seguidamente, el 28 de febrero del 2019, a través del Memorandum N° 108-2019/DCOVI/DIGESA, la DCOVI remitió a la DFIS, el expediente N° 31088-2017-DV-001, conjuntamente el informe N° 634-2019/DCOVI/DIGESA, incluyendo en los actuados el Informe de Ensayo N° 0142-2018-DCEYTA-CENAN/INS, de fecha 20 de abril del 2018 y el "Acta Ficha N° 06 – Acta de Inspección Sanitaria de Establecimientos Procesadores de Alimentos Varios y Bebidas"; del 25 de enero del 2019, sobre la vigilancia sanitaria efectuada por la DIRESA Lambayeque al establecimiento de fabricación del administrado;

Que, el 18 de julio del 2019, la DCOVI remitió a la DFIS, el Informe N° 2145-2019/DCOVI/DIGESA, mediante el cual recomendó remitir una serie de expedientes para que la DFIS, en el ejercicio de sus funciones, emita un pronunciamiento al respecto;

Que, mediante Oficio N° 249-2019-CENAN/INS (expediente N° 30084-2019-DV), recibido el 05 de junio del 2019, la Dirección General de Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud (en lo sucesivo, DG del CENAN INS) remitió a la DIGESA, el Informe de Ensayo N° 106-2019-DECYTA-CENAN/INS, de fecha 31 de mayo del 2019;

Que, el 05 de setiembre del 2019, a través del Oficio N° 002317-2019-GR.LAMB/GERESAL - L [3325558] (expediente N° 21405-2019-AS-003), la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, remitió a la DIGESA, el Informe Técnico N° 00041-2019-GR. LAMB./GERESA-JAMAJ [332558-0] conjuntamente con el "Acta Ficha N° 06 – Acta de Inspección Sanitaria de Establecimiento Procesadores de Alimentos Varios y Bebidas", de fecha 22 de agosto del 2019, sobre la vigilancia sanitaria efectuada al establecimiento de fabricación del administrado, evidenciando observaciones que acarrearían incumplimiento a la normativa sanitaria vigente así como riesgos de daño a la salud de la población, por lo que el personal inspector decidió aplicar la medida de seguridad de suspensión de la producción y comercialización de alimentos y bebidas a su establecimiento, hasta que demuestre, garantice y acredite el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, bajo la autorización de la Autoridad Sanitaria;



C. FERNANDEZ

Que, asimismo, con fecha 15 de octubre del 2019, mediante Resolución Directoral N° 284-2019/DFIS/DIGESA/SA, sustentado en el Informe N° 2482-2019/AI/DFIS/DIGESA, de fecha 09 de octubre del 2019, la DFIS, resolvió declarar la caducidad del PAS, seguido contra el administrado, mediante el Auto N° 350-2018/AI/DFIS/DIGESA/SA, tramitado bajo el expediente N° 57776-2018-PAS, por haber excedido el plazo para emitir pronunciamiento, disponiendo remitir los actuados a la autoridad instructora de la DFIS, a fin de proceder de acuerdo a sus funciones; dicho acto administrativo fue notificado el 04 de noviembre del 2019;



L. AYALA

Que, mediante el Oficio N° 1004-2019/DFIS/DIGESA, recibido el 11 de octubre del 2019, la DFIS le solicitó a la GERESA Lambayeque, remita información documentada idónea respecto del estado actual de la medida de seguridad de suspensión de actividades de producción y comercialización dispuesta por su representada en contra del establecimiento de fabricación del administrado, de acuerdo al "Acta Ficha N° 6 – Acta de Inspección Sanitaria de Establecimiento Procesadores de Alimentos Varios y Bebidas", de fecha 22 de agosto del 2019;



N. SUMIANO

Que, el 21 de octubre del 2019, mediante el Auto N° 289-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA, sustentado en el Informe N° 2586-2019/AI/DFIS/DIGESA, la Autoridad Instructora de la DFIS resolvió iniciar el PAS contra el administrado, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los literales a), b), c), d), e), f), k), y m) del artículo 121 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatoria, el cual debidamente notificado el 11 de noviembre del 2019;

Que, a través del Oficio N° 003013-2019-GR.LAMB/GERESA-L [3373030-2] (expediente N° 57778-2018-PAS-001), recibido el 11 de noviembre del 2019, la GERESA Lambayeque remitió a la



Resolución Directoral

Lima, 26 de febrero del 2021

DIGESA, el Informe Técnico N° 003013-2019-GR.LAMB/GERESAL – L [3373030-2], conjuntamente con el “Acta de Acontecimiento y Vigilancia Sanitaria de Establecimiento”, mediante la cual se precisa que la medida de seguridad de suspensión de actividades de producción y comercialización dispuesta por su representada en contra del establecimiento de fabricación del administrado, aún se mantiene;



C. FERNANDEZ

Que, posteriormente, con 30 de diciembre del 2020, mediante el Informe Final N° 3583-2019/AI/DFIS/DIGESA, se concluyó que, el administrado aún mantiene algunos incumplimientos tipificados en los literales a), b), c), d), e), f), k), y m), del artículo 121 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias, en ese sentido se propuso sancionar al referido administrado con multa equivalente a CATORCE (14) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), otorgándole el plazo de cinco (05) día hábiles a fin de presentar sus descargos correspondientes, por lo que, a través del Oficio N° 38-2020/DFIS/DIGESA, dicho documento fue notificado con fecha 23 de enero del 2020, siendo recibido por el señor Juber Armando Llauc Valdera, identificado con DNI N° 45038315, en calidad de familiar del administrado;



L. AYALA

Que, con fecha 06 de febrero del 2020, mediante el escrito s/n (expediente 57279-2019-PAS-001), el señor Juber Armando Llauc Valdera, advierte que el referido administrado **LLAUC VALDERA JOSE EDILBERTO** no reside en dicha dirección [**Calle Unión Mz. D1, Lt 30 Urb. Popular Miraflores – José L. Ortiz – Chiclayo – Lambayeque**], no siendo esta su propiedad, por lo que, procedió a devolver el íntegro de las cédulas de notificación;



N. SUMIANO

Que, en esa misma línea, mediante el Oficio N° 190-2020/DFIS/DIGESA, la DFIS, reiteró la notificación respecto al Informe Final de la Autoridad Instructora, en el domicilio ubicado en **Calle Los Incas 102, distrito de Morrope, provincia y departamento de Lambayeque**, teniendo como resultado en ambas fechas 01/07/2020 y 02/07/2020, con la ausencia constante del administrado, procediéndose a dejar bajo la puerta precitado documento;

Que, con fecha 05 de agosto del 2020, mediante el escrito s/n (expediente 57279-2019-PAS-002), y en referencia al Oficio N° 190-2020/DFIS/DIGESA; el señor Juber Armando Llauc Valdera, reiteró que el referido administrado no reside en dicha dirección [**Calle Unión Mz. D1, Lt 30 Urb. Popular Miraflores – José L. Ortiz – Chiclayo – Lambayeque**], advirtiéndole que en dicha dirección no es su propiedad, por lo que, procedió a devolver el íntegro de las cédulas de notificación;

Que, por otro lado, mediante la Resolución Directoral N° 211-2020/DFIS/DIGESA/SA, con fecha 30 octubre del 2020, la Dirección de Fiscalización y Sanción, sustentado en el Informe N° 2193-

2020/DFIS/DIGESA, resolvió sancionar al administrado **LLAUCE VALDERA JOSE EDILBERTO**, identificado con RUC N°10406036729, con una multa equivalente a DIEZ (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por haber infringido las normas sanitarias tipificadas en los literales a), b), c), d), e), f), k) y m) del artículo 121 del Reglamento Sanitario, asimismo, el referido administrado fue sancionado con AMONESTACION por haber incurrido en incumplimientos a la norma sanitaria, por lo que, se mantuvo la medida de seguridad de suspensión de producción y comercialización del establecimiento, hasta que el administrado demuestre, garantice y acredite el cumplimiento de la norma sanitaria vigente;

Que, en ese orden se ideas, y conforme se dejó constancia de la notificación realizada por la empresa Courier en fechas 06/11/2020 [primera visita] y 09/11/2020 [segunda visita], procediendo a dejar bajo puerta el precitado documento que contiene la resolución directoral;

DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE SALUD

Que, el artículo 128° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señala: *«la Autoridad de Salud está facultada a practicar inspecciones en cualquier bien mueble e inmueble, tomar muestras y proceder a las pruebas correspondientes, recabar información y realizar las demás acciones que considere pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, así como de aplicar medidas de seguridad y sanciones»*;



C. FERNANDEZ H.



L. AYALA

Que, el artículo 14° del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de Alimentos, establece: *«El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria la Autoridad de Salud de nivel nacional y tiene competencia exclusiva en el aspecto técnico, normativo y de supervigilancia en materia de inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, elaborados industrialmente, de producción nacional o extranjera, con excepción de los alimentos pesqueros y acuícolas»*;

Que, el numeral 1.2 del artículo 1° del Decreto Supremo N° 008-2017-SA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, textualmente señala: *«El Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud a nivel nacional y tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud. Asimismo, el literal d) del numeral 2.1 del artículo 2° del mismo dispositivo legal, señala que el Ministerio de Salud es competente en materia de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria»*. Además, el literal d) del numeral. 3.2 del artículo 3° del Reglamento señala como una función específica del Ministerio de Salud la de proponer la regulación de infracciones y las sanciones por la transgresión o incumplimiento de las normas sanitarias;

Que, según lo establecido en el artículo 101° del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA (en adelante: el Reglamento), *«La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud es el órgano encargado a nivel nacional de inscribir, reinscribir, modificar, suspender y cancelar el Registro Sanitario de los alimentos y bebidas y de realizar la vigilancia sanitaria de los productos sujetos a registro»*;

Que, en ese sentido, con el propósito de cumplir el objeto de las citadas normas, para quienes la infrinjan, se han regulado las infracciones administrativas debidamente tipificadas en los artículos 121° y 122° del Reglamento;

Que, dichas infracciones tendrán como consecuencia una sanción administrativa, que será impuesta por la DIGESA, quien en el uso de sus atribuciones que le confieren la citada ley, las leyes de organización y funciones, otras leyes especiales y sus reglamentos, está facultada para disponer acciones de orientación y educación, practicar inspecciones en cualquier bien mueble o inmueble, tomar muestras y proceder a las pruebas correspondientes, recabar información y realizar las demás acciones que considere pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, así como de ser el caso, aplicar medidas de seguridad y sanciones, de conformidad con el artículo 128° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud;



Resolución Directoral

Lima, 26 de febrero del 2021

Que, por otro lado, cabe precisar que mediante Decreto Supremo N° 008-2017-SA se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA, que establece la estructura orgánica de la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, la misma que cuenta entre otras unidades orgánicas, con la Dirección de Fiscalización y Sanción - DFIS que tiene como función fiscalizar, así como establecer medidas correctivas, medidas de seguridad, medidas cautelares, y sanciones de acuerdo a su competencia, conforme al artículo 83° del citado documento de gestión;

DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS Y LA RECOMENDACIÓN DEL USO DE CORREOS ELECTRÓNICOS

Del Estado de Emergencia

Que, sobre el particular, se tiene que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 11 de marzo de 2020) se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19 (enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo);

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 15 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el término de quince (15) días calendario y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;

Que, del mismo modo, como consecuencia de dicha declaratoria se dispuso la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, estableciendo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19;

Que, es así que, a través del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 10 de mayo de 2020) se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 27 de marzo de 2020), N° 064-2020-PCM (Publicado en el diario oficial El Peruano, el 10 de abril de 2020) y N° 075-2020-PCM (Publicado en el diario Oficial El Peruano, el 25 de abril de 2020); y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020;

SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Que, al respecto, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se dispone la suspensión por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encontraran en trámite desde su entrada en vigencia, con excepción de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los administrados;

Que, en esa línea, mediante Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de abril de 2020, se dispone la prórroga del plazo de suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo al amparo del numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020 (publicado el 16 de marzo de 2020), Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, por el término de quince (15) días hábiles contados a partir del 29 de abril del 2020 hasta el 20 de mayo del 2020;

Que, ahora bien, el 05 de mayo del 2020, se publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto de Urgencia N° 053-2020 "Decreto de Urgencia que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19 y dicta otras disposiciones", cuyo artículo 12 señala que la prórroga por el término de quince (15) días hábiles, de la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentran previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, se cuenta a partir del 7 de mayo de 2020;

Que, finalmente, a través del Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de mayo de 2020, se decretó prorrogar hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente norma, regulado en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM;

Que, del mismo modo, se decretó prorrogar hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, ampliado por el Decreto de Urgencia N° 053-2020;





Resolución Directoral

Lima, 26 de febrero del 2021

DE LA RECOMENDACIÓN DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA NOTIFICACIÓN

Que, en base a lo expuesto, por la COVID-19 se dispuso la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos, entre otros, a la libertad de tránsito en el territorio, estableciendo una serie de medidas para el ejercicio de dicho derecho durante la vigencia del Estado de Emergencia;

Que, es así que, a fin de viabilizar de manera más adecuada, ágil y efectiva las notificaciones y comunicaciones entre la Administración y los administrados -relacionadas o no con un procedimiento administrativo- se recomienda que en los escritos que se presenten proporcionen una copia en formato de correo electrónico;

LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Que, en los procedimientos administrativos iniciados de oficio, como el procedimiento administrativo sancionador, el decurso del tiempo aunado a «[La inactividad de la administración produce dos efectos favorables al particular: por un lado (...) la prescripción de las infracciones; y, por otro, la caducidad del procedimiento ya iniciado (o perención)]»¹. La prescripción siempre tuvo reconocimiento en el ordenamiento administrativo general; sin embargo, la caducidad, a pesar de su utilidad práctica, no había sido objeto de atención por el legislador. El 21 de diciembre de 2016, con la publicación del Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo² se optó por incorporarla;

Que, conforme a la doctrina española³, la caducidad es aquella institución jurídica que de producirse (por el mero transcurso del tiempo) inhabilita legalmente a la Autoridad Administrativa para proseguir con el procedimiento administrativo sancionador iniciado, sin importar la etapa en que se encuentre, o para exigir la sanción decidida, pero no notificada oportunamente. En ese sentido, la caducidad constituye una figura jurídica que determina el tiempo máximo dentro del cual se debe instruir y resolver -que incluye notificar- un procedimiento sancionador. Dicho planteamiento doctrinal se positivizó en el artículo 237-A de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, incluido en el Decreto Legislativo N° 1272, que establece como tiempo máximo para la conducción de los procedimientos sancionadores el plazo de nueve (09) meses, más tres (03)

¹ NIETO GARCÍA, Alejandro. *Derecho administrativo sancionador*. Quinta edición. Madrid: Editorial Tecnos, 2012, p. 550.

² Publicado el 21 de diciembre de 2016 en el diario oficial El Peruano, en consecuencia, vigente desde el día siguiente.

³ GÓMEZ TOMILLO, Manuel y SANZ RUBIALES, Íñigo. *Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. Teoría General y Práctica del Derecho Penal Administrativo*. Segunda edición. Pamplona: Editorial Aranzadi S.A., 2010, p. 771.

meses de ampliación en casos excepcionales. Vencido dicho término sin emitirse pronunciamiento debidamente notificado opera la caducidad, consecuentemente, corresponde archivar el procedimiento sancionador en trámite. No obstante, el referido dispositivo legal deja abierta la posibilidad para que a través de leyes especiales las entidades regulen un plazo mayor o menor al indicado;

Que, ahora bien, mediante el Decreto Legislativo N° 1452, se modificó la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, entre los cuales se encuentra el artículo 237-A de la acotada ley, referido a la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, debiendo precisar que este artículo, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, actualmente se encuentra ubicado en el artículo 259, en el que se establece:

«Artículo 259.- Caducidad del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad no aplica al procedimiento recursivo.

Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procederá a su archivo.
3. La caducidad es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio.
4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado no interrumpe la prescripción». (él énfasis es nuestro).
5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador.” (Numeral incorporado por el Decreto Legislativo N° 1452.)

Que, ese sentido, todos aquellos procedimientos administrativos sancionadores que fueron iniciados con posterioridad a la fecha de publicación del Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, cuentan con nueve (09) meses desde la fecha de notificación de la imputación de cargos para ser resueltos definitivamente. Sin embargo, este plazo puede ser ampliado excepcionalmente por tres (3) meses adicionales, para lo cual el órgano competente deberá emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento;

Que, en virtud de ello, debemos advertir que conforme a los actuados en el presente expediente administrativo N° 57279-2019-PAS; en los seguidos contra el administrado **LLAUCE VALDERA JOSE EDILBERTO**, la Dirección de Fiscalización y Sanción, a través del Auto N° 289-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA, sustentado en el Informe N° 2586-2019/AI/DFIS/DIGESA, de fecha 21 de octubre del 2019, ambos documentos debidamente notificados al administrado con **fecha 11 de noviembre del 2019**; formalizó el inicio del procedimiento administrativo sancionador incoado contra del referido administrado;





Resolución Directoral

Lima, 26 de febrero del 2021

Que, asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el TUO de la Ley N° 27444, la norma señala que, el plazo de caducidad de los procedimientos administrativos sancionadores tiene un periodo de nueve (09) meses, contabilizados desde la notificación del acto de imputación de cargos; para que la Autoridad Sanitaria resuelva el procedimiento administrativo iniciado de oficio;



C. FERNANDEZ

Que, al respecto, debe tenerse en cuenta que, al momento de realizar la notificación de la Resolución Directoral N° 211-2020/DFIS/DIGESA/SA, de fecha 30 de octubre del 2020, la empresa Courier, dejo constancia de la diligencia de notificación en las visitas realizadas con fechas 08/11/2020 y 09/11/2020; en el domicilio ubicado en Calle Los Incas N° 102, distrito de Morrope, provincia y departamento de Lambayeque;



L. AYALA

Que, en vista de ello, y conforme a lo actuados en el expediente administrativo, se colige que, el referido procedimiento administrativo iniciado contra el administrado debió resolverse **en principio** hasta el día **11 de agosto del 2020**, sin embargo, debemos tomar en cuenta el plazo de suspensión determinado por el Estado de Emergencia respecto al COVID -19, [2 meses y 3 semanas], debiendo agregarse el precitado plazo a fin de establecer concretamente el nuevo plazo que tiene la Autoridad Sanitaria para resolver el procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

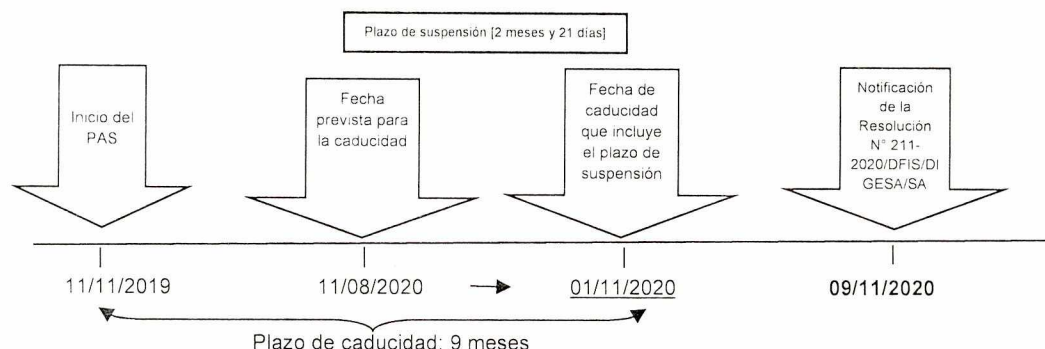


N. SUMIANO

Que, seguidamente, se tiene que, la Autoridad Sanitaria tuvo como plazo indefectiblemente hasta el **01 de noviembre del 2020**, para resolver el precitado procedimiento administrativo sancionador, sin embargo, tal como constancia de la notificación de la Resolución Directoral 211-2020/DFIS/DIGESA/SA, el precitado acto administrativo tiene como fecha de notificación el 09 de noviembre del 2020, plazo que vemos se encuentra vencido en lo referido al artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

Que, en consecuencia, se advierte que, a la fecha se ha excedido el plazo máximo para emitir pronunciamiento por parte de Autoridad Sanitaria, por haber transcurrido los 09 meses, **incluidos el plazo de suspensión**, conforme consta en el expediente administrativo, no habiendo tampoco ampliado por única vez el referido plazo ampliatorio conforme a lo establecido por TUO de LPAG, por tanto; solo cabe proceder a declarar la caducidad del referido procedimiento administrativo sancionador;

Que, en virtud de ello, y con la finalidad de tener más detalle al respecto, precisamos lo indicado en el presente gráfico:



Que, asimismo, y de la revisión de los actuados, se verifica que la Dirección de Fiscalización y Sanción, aún tiene competencia para pronunciarse respecto a las posibles infracciones en las que hubiera incurrido el administrado; en vista de las inspecciones sanitarias con fechas **02 de agosto del 2017 y 22 de agosto del 2019** realizadas en el establecimiento del administrado; por lo que, correspondería ser materia de evaluación por parte de la Autoridad Instructora, al no encontrarse dentro de los alcances de la prescripción regulada en el numeral 4, del artículo 259.º del TUO de la LPAG, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

Que, finalmente, y de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 259º del TUO de la LPAG, señala que, la caducidad administrativa del presente procedimiento administrativo sancionador **no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización realizadas, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente, así también las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas**, de ser el caso, se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego del cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza;

DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Que, en el presente sub capítulo, es de mencionar de conformidad con el contexto analizado, la potestad de la autoridad, de poder iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de inacción administrativa que conllevaran a la declaración de caducidad del presente procedimiento, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencias;

Que, en este sentido, deberá entenderse que la responsabilidad administrativa, la cual radica en las consecuencias derivadas de las acciones u omisiones, las cuales deben producirse dentro de las funciones asignadas al empleado del Estado o empleado público⁴; es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, encontrándose vigente o extinguido su vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de la acción de control.

Que, en el caso de autos, y conforme al plazo legal para resolver o ampliar excepcionalmente el plazo de caducidad en el presente procedimiento administrativo sancionador, venció el **01 de noviembre del 2020** (según el TUO de Ley N° 27444, de la LPAG, conforme al artículo 259º, numeral 259.1);

⁴ Todo aquel que independiente del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con algunas de las entidades y que en virtud de ello ejerce funciones con tales entidades, de acuerdo a lo indicado en la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y en concordancia con lo mencionado en la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, ser todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado, no importando el régimen jurídico de la entidad en la que preste sus servicios ni el régimen laboral o de contratación al que se encuentren sujetos.



Resolución Directoral

Lima, 26 de febrero 2021

Que, por tanto, atendiendo al caso objeto de materia y a la facultad contenida en el precitado apartado legal, es de mencionar la potestad con la cual la autoridad administrativa de dar inicio a las acciones correspondientes contra aquellos servidores públicos participantes del presente procedimiento administrativo sancionador conforme a la información obrante en los actuados del expediente administrativo; a fin de verificar su responsabilidad administrativa en caso de negligencia durante el desarrollo de sus funciones, las cuales podrían haber conllevado a la caducidad del procedimiento; sin desmedro de poner en conocimiento a la Secretaría de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ministerio de Salud, los actuados a fin de valorar las medidas reguladoras o sancionadoras convenientes;

Que, con el visado del Abogado y Coordinador del Área de Sanción de la Dirección de Fiscalización y Sanción; y;

De conformidad a lo establecido en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1161; el Decreto Supremo N° 008-2017-SA – Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA, la Ley N° 26842 – Ley General de Salud; el Reglamento Sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias; y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N°211-2020/DFIS/DIGESA/SA, mediante la cual resolvió sancionar al administrado con multa equivalente a DIEZ (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), y asimismo, amonestado por haber incumplido las normas sanitarias vigentes, la misma que no pudo ser notificada, dentro del plazo de caducidad establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Artículo Segundo.- Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el administrado **LLAUCE VALDERA JOSE EDILBERTO**, con RUC N° 10406036729, iniciado mediante Auto N° 289-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA, y notificado con fecha 11 de noviembre del 2019, por haber excedido el plazo máximo para emitir pronunciamiento conforme a lo previsto en el artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en consecuencia, corresponde disponer el archivo del expediente administrativo tramitado bajo el N° 57279-2019-PAS.



L. AYALA



L. AYALA

Artículo Tercero. - REMITIR el presente expediente administrativo a la Autoridad Instructora de la Dirección de Fiscalización y Sanción, para que actúe de acuerdo a sus atribuciones, de conformidad con el numeral 4 del artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, pudiendo también evaluar nuevas acciones de fiscalización si lo fuera necesario.

Artículo Cuarto. - REMITIR copias fedateadas de las actuaciones contenidas en el presente expediente administrativo, a la Dirección General de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, a fin de remitir a la Secretaría de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ministerio de Salud, para determinar las responsabilidades correspondientes.

Artículo Quinto. - NOTIFICAR la presente resolución directoral al administrado **LLAUCE VALDERA JOSE EDILBERTO**, en el domicilio ubicado en Calle Los Incas N° 102, distrito de Morrope, provincia y departamento de Lambayeque, o al correo electrónico mbrenis.asesorialegal@gmail.com, consignada por la administrada, conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Regístrese y Comuníquese

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
E INOCUIDAD ALIMENTARIA
Abog. CARLOS ENRIQUE FERNÁNDEZ HERRERA
DIRECTOR EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN